



Universidad de Concepción

Principios de Educación II

# **La Reforma Educativa como Método de Apartheid Socio-Educacional**

Estudiante: Javier Arroyo Olea

Profesor: Dr. Carlos Muñoz Labraña

Ayudante: Bastián Torres Durán

***Ciudad Universitaria, 31 de diciembre del 2014***

El actual gobierno de la Nueva Mayoría, liderado por la presidenta Michelle Bachelet Jeria, ha propuesto una reforma educacional con el fin último de finalizar las problemáticas que posee el sistema en esta área y, de una vez por todas, detener las grandes movilizaciones sociales que apuntan a defender y exigir mejoras en el sistema educativo. Pese a esto, la reforma, que se encuentra entre los documentos empolvados de la Cámara Alta debido a su aprobación por parte de los Diputados, es identificada como un método de *apartheid socio-educacional*, segregando a la educación según la clase social a la que el individuo que ingrese a un establecimiento educacional pertenezca, comprendiendo que éstos serán estigmatizados entre privados y municipales, eliminando a los que posean el financiamiento compartido. Es aquí donde existe una separación a nivel socio-educacional, comprendiendo que, al repartir de tal manera el tipo de educación, claramente se reproduce un antagonismo entre clases, acentuándose cada vez más y aumentando el conflicto social, dando hincapié en una desigualdad tanto en el ámbito socioeconómico como en el ámbito de la educación.

Si bien, comprendemos al apartheid como un proceso histórico que acentuó la división de la sociedad sudafricana hasta finales del siglo XX, imponiendo “terribles restricciones de todo tipo (...) a los no blancos, la ignorancia y marginación” (Bissio, 1977), concebimos éste proceso como símil de la reforma que el gobierno actual propone y desarrolla, pero ligándola al ámbito educacional, generando una división de la educación, acentuando, al igual como sucedió en Sudáfrica, la diferencia de clases, produciendo un descontento social que desencadenó la rebelión por parte de gran parte de la población. Es necesario hacer hincapié en que el apartheid trajo consigo factores raciales, económicos, sociales, políticos e incluso geográficos, representando un fenómeno mucho más complicado e importante para el análisis histórico. Sin embargo, lo que tratamos de demostrar en el presente ensayo radica en la división de la educación directamente proporcional a la clase social de los y las estudiantes dentro del sistema educativo, método que la reforma cristaliza, sometiéndose no a una mejora de la educación sino que, por el contrario, a un deterioro de la misma, basándose en el acceso a ésta de manera mucho más basada en la posesión de capital económico que antes.

Al analizar la reforma desde una óptica crítica, centrándonos en la disciplina de la educación, podemos enunciar nuestro punto de vista de manera segura: este cambio que busca hacer el gobierno de turno es el transporte de una segregación, no racial como lo fue en Sudáfrica, sino que centrado en el ámbito educacional y social chileno. Es por esto que identificamos a la reforma como una política de apartheid que utiliza la Nueva Mayoría para continuar e incluso acentuar la educación, utilizando un método que posee como fin último la división de la sociedad en su máximo esplendor.

Dentro de la misma reforma podemos encontrar diversos fundamentos que respaldan la esencia de la división socio-educacional que posee este objeto legal, contradiciéndose de manera explícita mediante su análisis objetivo y crítico, centrándose en las grandes temáticas que aborda dicha reforma, encontrándose con fallas, anomalías y vacíos que el mismo gobierno conoce y evita tocar, manteniendo y acentuando aún más la problemática central de la educación chilena, utilizando cambios superficiales que no llegan a ser trascendentales para la resolución del conflicto. Es así como podemos identificar tres grandes aristas de la reforma educacional que, a la vez, nos señalan fundamentos que apoyan la tesis que hemos planteado con anterioridad.

Primero que todo se encuentra la temática de *selección* que el gobierno ha defendido, con garras y colmillos, ya que es una de las grandes propuestas que trae consigo la reforma, al eliminar el método de selección por parte de los

establecimientos educativos. Esto refleja un claro avance ya que los establecimientos no podrían discriminar, principalmente, por situación socioeconómica, generando la eliminación de un gran filtro que utilizaban los colegios para escoger a sus estudiantes, estigmatizando a los postulantes mediante factores que el mismo establecimiento entendía como coherentes dentro de sus parámetros. Sin embargo “la ciudadanía ve nuevamente, como de forma paulatina, se va cocinando en el Congreso una reforma que no se acerca ni a un ápice a lo expresado por la movilización social” (Murieta, 2014), debido a que el aclamado “fin a la selección” sólo se concibe en *aspectos socioeconómicos, dejando de lado los aspectos culturales* dentro de los cuales podemos identificar el aspecto étnico, religioso, capacidades distintas y, concebido como más trascendental, el de sexo.

En sí, el fin a la selección se limita a un factor que, pese a ser elemental, no ofrece la integración total de los y las estudiantes, dejando de lado todo el aparataje cultural por el cual está compuesta la sociedad chilena. Es por esto que la reforma en sí representa un método de *apartheid* socio-educacional, planteando una falacia al momento de referirse al fin de la selección por parte de los establecimientos ya que, en nuestros tiempos contemporáneos, pleno siglo XXI, aún existen barreras culturales tan básicas como lo es el sexo de una persona. Si bien, la formación de estudiantes estuvo caracterizada en el siglo XIX y XX por la división entre mujeres y hombres, es inaceptable que, al momento de plantear la opción de finalizar con la selección, no se mencione esta temática que se continúa practicando en nuestro sistema educativo. Además de este método de *apartheid sexista* que posee esta arista de la reforma, se puede resaltar la selección por credo, es decir, por la religión que practique el o la estudiante que postule a un establecimiento de índole religiosa. Es aquí donde el aspecto de “fin a la selección” se derrumba nuevamente, levantando sobre sus cimientos otro método para dividir la educación, refugiándose en los parámetros religiosos que el establecimiento proclame y defienda, estigmatizando y manteniendo al margen a los sectores de la sociedad que no practiquen su misma religión. Esta segmentación de la población, que se refleja en la selección de los y las estudiantes por parte de este tipo de establecimientos, no es mencionada por la reforma que el Senado discute dentro de cuatro paredes, manteniéndose al margen y evitando el debate, generando la aceptación de una división de la educación por credo, es decir, un *apartheid religioso*. Por otro lado, las capacidades que posee la persona que intente acceder a un establecimiento también son limitantes de selección que la reforma no elimina, ¿por qué?, quizás porque no comprende la discriminación de la cual son víctimas los niños y las niñas que poseen capacidades que, para el sistema, son catalogados como “especiales”, observándolos y mencionándolos de manera peyorativa, manteniendo una segregación de estas personas cuyo caso, al cual se ven sometidos por políticas que diversos establecimientos poseen, no es contemplado dentro del “fin a la selección”, generando una división y discriminación dirigido a un sector de la sociedad cuyo problema no es de relevancia para la cúpula política, pasando inadvertido el desprestigio, discriminación y maltrato al cual se ven sometidos. Para continuar y culminar con este método que utiliza la reforma para generar y legitimar un *apartheid* socio-educacional, es necesario mencionar el rol que cumple el factor étnico en la selección de estudiantes. En este aspecto, los establecimientos no se ven en la obligación de integrar a las personas que se sientan parte de un pueblo originario, pasando por encima de éstos y seleccionando a los y las estudiantes que calcen dentro del concepto de “cultural normal” que cada institución concibe acorde a la moral imperante. Es aquí donde se refleja la política que el gobierno ha mantenido en relación a las etnias, segregándolas y discriminándolas de una forma diferente a lo comúnmente vista dentro de nuestra sociedad, llevando este

método de traba a campos políticos y sociales, reproduciendo el método de apartheid ligándolo directamente con aspectos étnicos, culturales e incluso raciales.

Es a través de esta ambigüedad que posee la reforma, en lo que concierne con el fin a la selección, que el gobierno aún no logra comprender que "el ambiente social forma la disposición mental y emocional de la conducta en los individuos introduciéndolos en actividades que despiertan y fortalecen ciertos impulsos, que tienen ciertos propósitos y provocan ciertas consecuencias" (Dewey, 1998). Al no entender esto, y llevarlo a la *praxis política*, la única solución que plantean es dividir la educación acorde a las características mencionadas, cristalizando su política a través de un apartheid socio-educacional, respaldándolo en la legalidad de un proyecto de ley que utiliza títulos tan fundamentales como "fin a la selección", cuando siquiera abarca el aparataje segregador en el que se encuentra basado el sistema de selección dentro de los establecimientos educativos. Es más, al no enfocarse en este aspecto, legítima dichas segregaciones, dejando a éstas como las únicas oportunidades legales para separar a los y las estudiantes, dejando de lado la selección con pinza basada en lo socioeconómico y apuntando directamente al aspecto cultural de las personas.

En segundo lugar es necesario tener en cuenta otra arista que plantea el gobierno la cual se refiere al *financiamiento*, uno de los ejes centrales que aborda la reforma y que, a la vez, no se escapa de contradicciones e, incluso, construye uno de los tres pilares que legitiman la división de la educación dentro de la sociedad. Si bien concebimos que "cada reforma de un sistema educativo implica una reflexión previa sobre las finalidades de la educación, sus objetivos, así como el papel de las instituciones educativas" (Hummel, 1978), la que se propone actualmente pareciera ser adelantada a su tiempo o, simplemente, estar pésimamente enfocada ya que no posee siquiera una reflexión sobre la educación, sino que una mera reproducción de la segregación de la población.

El aspecto del financiamiento que plantea el gobierno ha sido, y es, uno de los ejes centrales en donde se ha movido la reforma, defendiendo su cambio como uno de los mejores métodos para lograr calibrar la educación de una manera sistemática y pausada. El cambio que plantea busca eliminar del campo referido al financiamiento a los establecimientos educacionales que posean un régimen particular-subvencionado, dando paso a la mantención de la educación municipal, enfrentándose a los establecimientos con financiamiento privado. *Este método es el más explícito al momento de referirnos a la cristalización de un apartheid socio-educacional*, debido a que el financiamiento de un establecimiento es lo que determina su "status", especialmente de la educación. Si bien la diferencia entre clases sociales ha estado siempre en la palestra educativa (esencialmente en el financiamiento de estos), mediante este proyecto legislativo acentúa la problemática, segmentando a los y las estudiantes por la clase social a la cual pertenezcan. Por otro lado, persistirá la problemática del sacrificio por parte de los apoderados y apoderadas que, de una u otra manera, harán lo posible por matricular a sus hijos o hijas en un colegio con mayor "prestigio" y, por ende, incurrirán en un mayor desgaste económico para permitir entregar, desde sus perspectivas, una mejor educación.

Este aspecto es el que representa una de las problemáticas más trascendentales al momento de referirnos sobre la educación. Si bien el financiamiento es uno de los factores que se hace necesario tener en cuenta para generar, aumentar y fundamentar el debate social, *no hay que confundir libertad de enseñanza con libre mercado*, dos conceptos totalmente diferentes pero que, la mayoría de las veces, genera malentendidos. Si bien la libertad de enseñanza se comprende como "el derecho de elegir la educación y de contar con ofertas educativas diversas a las del Estado para

ejercer esta libertad" (del Pozo, 2014), ésta debe ser reestructurada, comprendiendo que los establecimientos educacionales, y sus representantes en sí, no deben poseer la facultad de *liberalizar la educación en términos económicos*, sino que comprender aquella libertad como el método mediante, parafraseando a Weber, no se enseñe sólo una visión de un tema, sino que mostrando todas las que logre comprender, para que luego el o la estudiante pueda escoger y criticar con su óptica cada una de éstas visiones. Es aquí donde comienza a intervenir el financiamiento, arista que, como lo plantea la reforma, sólo busca dividir entre personas que posean mayor y menor capital económico, dando paso a el aumento del libre mercado dentro de la educación y manteniendo al margen de la oportunidad de debate a las personas que no logren entrar en cierto sector social, utilizando una barrera económica que, al fin y al cabo, segrega a la educación y a la sociedad por la simple posesión de ciertos números en su cuenta bancaria.

Este método que la reforma utiliza para concretar el apartheid socio-educacional que se ha planteado, ha sido uno de los más criticados por el profesorado, funcionarios, administradores y sostenedores de los colegios con financiamiento compartido, pero dicho acto de protesta no está ligada a la comprensión de esta arista como un desprestigio a la educación, dando paso al aumento de la brecha socioeconómica que divide al país en la actualidad, sino que se realiza por intereses privados, por el bien propio antes del colectivo en la mayoría de los casos. Con esta reforma, los sostenedores ven en peligro la inversión que por tantos años les remuneró grandes cantidades de capital económico, es por eso que han salido a protestar: por simples intereses personales. Es aquí donde se puede observar la inexistencia del compromiso con la educación por parte de la mayoría de los privados, observando a éste como un método para obtener ganancias y, sencillamente, lucrar. Es por esto que se plantea la siguiente pregunta retórica: si bien, con la existencia de los establecimientos que poseen financiamiento compartido existe un aprovechamiento por parte de sus representantes, avalando el lucro y defendiendo sus ganancias, ¿cómo será cuando, al abolir estos establecimientos, sólo exista el monopolio por parte de los privados, enfrentándose a los mal percibidos colegios municipales?

Es mediante este aspecto ambiguo que posee la reforma que su representación como apartheid socio-educacional se reafirma en la futura práctica, segmentando aún más a la sociedad, pese a que en el discurso político que ofrece el gobierno se mantiene una postura enfocada a la igualdad de la educación, postura que claramente no posee aquel enfoque, sino que mantiene su mirada fija al permitir aún más el lucro y, directamente, aumentar una brecha socioeconómica que ha estado en los cimientos de la educación chilena desde hace años, respaldando a como un método de división social.

En tercer lugar se hace necesario el mencionar a la *calidad* como uno de los grandes métodos que posee la reforma para segregar a la población mediante la educación. Es imperativo el comprender a la calidad como uno de los aspectos más elementales de la educación y uno de los componentes básicos que permiten el correcto desarrollo de ésta. Es por esto que "cuando la vida social deje de ser un campo de explotación (...), cuando comience a transformarse en una realidad creada por el hombre, desde ese momento puede y debe comenzar una unión estrecha entre la educación y la vida" (UNESCO, 1976), manteniendo el objetivo que, parafraseando a Kant, debería tener la educación el cual es permitir el desarrollo natural del humano. Sin embargo, la calidad de la educación se ha concebido en nuestra actualidad mediante números y objetos físicos, dejando de lado toda la tramoya elemental que permite construir a la educación, obscureciéndola con meras implantaciones de artilugios observables y tangibles. Es a través de ésta concepción que la mayoría de la

población entiende que, al colocar a sus hijos o hijas en un colegio de financiamiento privado, éstos tendrán una mejor calidad de la educación debido a su infraestructura y sus recursos, cuando en esencia no es así. Si bien los recursos son elementales para realizar y obtener una mejor educación, la calidad no radica en dicha definición, por lo que la sociedad ha malentendido su concepción original y sólo reproduce una metamorfosis peyorativa que los gobiernos, tanto el actual como los pasados, han tratado de mantener y fundamentar. Es por esto que la reforma, dentro de su concepción, utiliza a la calidad como método de división socio-educacional, permitiendo el monopolio de mejores recursos por parte de los privados, dejando de lado a los establecimientos municipales que, como lo indica el nombre, son financiados por los recursos que el municipio posee. Es aquí donde se debe hacer un hincapié, comprendiendo a este factor como esencial ya que, si bien “tras años de movilización por la educación, existe un consenso mayoritario de fortalecer la Educación Pública” (OPECH & FDE, 2014), el gobierno de turno permite el aumento de la vulneración de ésta, permitiendo la división de la calidad educativa en dos grandes regímenes de financiamiento, legitimando el apartheid socio-educacional a través de su proyecto de reforma.

Es así como la calidad cumple un rol enorme dentro de la concepción de la educación, pero que a través de la reforma sólo se cristaliza la división misma de ésta, repartiéndola según establecimiento, parcelando dentro de dos grandes sectores sociales su obtención, siendo entregada a algunos en bandeja de plata, por el simple hecho de tener la oportunidad de pertenecer a un colegio de financiamiento privado, mientras que a otros es entregada en siquiera una bandeja, sino que en un soporte de papel, reflejando el método de división que posee la reforma, cristalizándolo mediante un proyecto de ley que, como se ha ido analizando en este aspecto, cumple un rol determinante al momento de referirnos sobre el enfoque segregador que posee y la legitimación de una división social utilizando como medio de transporte a la educación.

Si bien el gobierno ha planteado diversos argumentos a favor de la realización de su reforma, estos vagan en lo escueto, mostrando una postura poco justificable sobre su accionar. Es con esto que el gobierno de turno, a través de su proyecto de ley del presupuesto 2015 que se encuentra en trámite dentro del Congreso, hace hincapié en que dicho presupuesto “contempla una inversión de \$7.617.948 millones, tiene un claro énfasis en el fortalecimiento de la educación pública. Con estos recursos se reparará y mejorará la infraestructura escolar de las escuelas públicas a lo largo del país: se aumentarán los talleres, recursos pedagógicos y asesorías a directores y profesores” (Gobierno de Chile, 2014).

Sin embargo, tal argumento que presentan los defensores de la reforma educacional queda sin ningún peso frente a su análisis detallado ya que, como se ha analizado anteriormente, el enfoque de la reforma no busca generar cambios trascendentales y que vayan en pos de una mejora de la educación sino que, por el contrario, apunta directamente a convertirse en un método de apartheid socio-educacional, centrándose sólo en temáticas que puedan ser plausibles a la simple vista, sin poseer un trasfondo de cambios trascendentales. Es así como, a través del aclamado fin a la selección, el financiamiento y la calidad que esta reforma levanta como altas consignas para su representación, lo que busca en realidad es aumentar la división de la sociedad, utilizando a la educación como el método elemental para cumplir su objetivo y, de una u otra manera, hacer pensar a la población de que en realidad la educación está viviendo cambios que irían en su mejora.

Este método de división, que tomó la forma de un proyecto de ley *ad portas* de ser aprobado, siquiera menciona “el dilema de escoger entre lo que de ellos

[estudiantes] se pide, que es prepararse para competir en un mercado profesional, y el impulso de su empatía social que los lleva a desear cambiar un orden político-cultural generador de excesivas desigualdades que traen pobreza y sufrimiento material y espiritual" (Maturana, 2007), dejando de lado toda la esencia que debe poseer y a la cual se debe enfocar la educación, centrándose en ámbitos tecnocráticos y medibles por simples porcentajes y números, señaléticas que son utilizadas para poder mostrar a la población, a través de una uniformidad de números, el supuesto avance de la educación y su fundamento para aprobar la reforma. Pese a esto, el objetivo principal que se logra identificar dentro de la reforma es, explícitamente, generar una división de la población, centrándose en el ámbito socio-educacional y utilizando supuestos cambios que, como se ha analizado, no representan ni la sombra de lo que titulan, sino que apelan a cambios superfluos y sin poseer alguna trascendencia positiva para la educación chilena.

Hay que hacer énfasis en que la reforma del actual gobierno posee una serie de contradicciones las cuales dan a conocer la poca claridad con la cual actúa la cúpula política, planteando como objetivo de gobierno una educación pública, de calidad y gratuita para todos los niños y niñas, pero que en la teoría no se fundamenta y, lo que es peor, se tergiversa debido a su ambigüedad al abarcar áreas de la educación, dando a conocer la falencia de conocimientos que tiene en su saber tanto el actual ministro de educación, Nicolás Eyzaguirre, como todas las personas que intervienen en este proyecto de reforma, apuntando al aumento del deterioro de la educación mediante el creciente antagonismo tanto entre los establecimientos como entre los y las estudiantes que serán estigmatizados, quizás no excesivamente por su nivel socioeconómico, pero sí se les serán colocadas más trabas que, pese a que su existencia se remonta antes de la presentación de la reforma, es con ésta que obtendrán notoriedad y serán aún más utilizadas para lograr generar un filtro de estudiantes al momento de entrar a un establecimiento, permitiendo la continuación de la selección la cuál quedará dispuesta a las políticas morales que el establecimiento estime convenientes. Además, la postura del gobierno, si bien plantea un aumento de la infraestructura, no asegura el mejoramiento de la calidad de la educación, manteniéndose en un margen cómodo donde señalan a la educación como un factor que se puede "arreglar" meramente con mejoras a nivel físico de los colegios cuando, por el contrario, la calidad no radica en algo tangible.

En síntesis, pese a que el gobierno ha intentado refugiarse en sus consignas para favorecer y mostrar a la población la cara amable de la reforma educacional, se puede observar que sus dichos no son coherentes con lo que planean llevar a la práctica, limitándose a sólo promesas y títulos llamativos que, en sí, no representan cambios estructurales que permitan mejorar la educación sino que, por el contrario, representan metodologías de división que, en su conjunto, producen el método de apartheid socio-educacional del cual la reforma es su envase, protegiendo al producto que se encuentra en vías de ser discutido por el Senado, llevando consigo todo el debate social que se ha colocado en la palestra mediante las movilizaciones del presente año, donde una parte de los y las estudiantes se ha movilizado, comprendiendo que dicha reforma es nuevamente la manera en la que Michelle Bachelet busca escabullirse de la problemática en educación, tal cual cómo lo hizo el año 2009 con la promulgación de la Ley General de Educación, prometiendo un cambio trascendental que nunca llegó a concretarse en una realidad, sino que se mantuvo como utopía en la conciencia de las personas que participaron en aquella movilización social. Es por eso que no es la primera vez que la presidenta Bachelet nos muestra una faceta del desear cambiar sistemáticamente la educación para mejorarla, por lo que ya se es conocido su discurso y su postura. Sin embargo, esta vez algo es distinto, y es lo

que radica en el comprender que, de cierta manera, la población comenzó a despertar progresivamente, llevando a la educación al campo del debate social y oponiéndose a ser partícipes de un método de división social ya que, como bien se ha levantado la voz en las calles, lo que se necesita es educación de calidad, no de caridad, por lo que la unión comienza a realizarse a base de repudio frente a un proyecto de reforma que, como bien se concibe, no es ni la sombra de lo que aparenta ser, proyectando el presente ensayo como insumo para la discusión colectiva sobre el verdadero enfoque que posee la reforma: un método para legalizar un apartheid socio-educacional.



### **Bibliografía**

- Bissio, B. (1977). *Sudáfrica: La crisis del Apartheid*. Nueva Sociedad, nº31-32, 231-240.
- del Pozo, V. (2014). *La malentendida Libertad de Enseñanza*. Educación2020. Recuperado el 17 de diciembre del 2014. Extraído de <http://educacion2020.cl/noticia/la-malentendida-libertad-de-ensenanza>
- Dewey, J. (1998). *Democracia y educación*. Madrid, España: Morata, S.L.
- Gobierno de Chile. (2014). *Presupuesto 2015, proyecto de ley en trámite en el Congreso*.
- Hummel, C. (1978). *La educación de hoy frente al mundo de mañana*. Colombia: Voluntad Editores Ltda. & Cia. S.C.A.
- Maturana, H. (2007). *Emociones y Lenguaje en Educación y Política*. Chile: Comunicaciones Noreste LTDA.
- Murieta. (2014). *La Gran Reforma educativa, también se cocina en el Congreso*. Periódico Resumen, 3.
- OPECH & FDE. (2014). *Criterios para la reconstrucción de lo público en Educación en el Chile Neoliberal*. Educaciónparatodos. Recuperado el 17 de diciembre del 2014. Extraído de: <http://www.educacionparatodos.cl/criterios-para-la-reconstruccion-de-lo-publico-en-educacion-en-el-chile-neoliberal/>
- UNESCO. (1976). *La educación en marcha*. Barcelona: Teide, S.A.